

PACIFISMO, GUERRA JUSTA Y LEGÍTIMA DEFENSA

Alfonso Ruiz Miguel

Universidad Autónoma de Madrid

I



ESTE escrito puede ser leído como una revisión de un libro mío sobre el problema de la justicia de guerra publicado a finales de 1988 ¹, un año antes de la caída del muro de Berlín y, por tanto, del comienzo del derrumbamiento de los regímenes satélites del Este europeo y de la disolución del sistema político de la propia Unión Soviética. En el plano de las relaciones internacionales este decisivo cambio

¹ *La justicia de la guerra y de la Paz*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

El presente artículo tiene su origen en una conferencia en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria (Laredo, septiembre de 1991) que, a su vez, reconstruye parcialmente el texto de un curso más amplio impartido en Vitoria en julio del mismo año: «Guerras justas e injustas: entre la moral y el Derecho», *Cursos de derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1992, pp. 95-151; salvo algunas pocas y leves correcciones, el presente texto ha sido previamente publicado en versión alemana de Ruth ZIMMERLING: «Pazifismus, gerechter Krieg und Notwehr», en Werner KRAWIETZ y George HENRIK VON WRIHGT (comps.): *Öffentliche*

histórico ha quebrado la anterior estructura bipolar del poder internacional y ha entregado en gran medida la hegemonía a los Estados Unidos. Esta nueva configuración internacional, que la guerra del Golfo Pérsico comenzó a poner claramente de manifiesto, permite contrastar la validez de los criterios sobre la justicia de la guerra desde un punto de vista en buena medida distinto al período precedente. Como se irá viendo, sin embargo, más que a una revisión tajante de planteamientos anteriores, la nueva situación internacional anima más bien a plantear dudas donde antes, al menos por mi parte, había mayores certidumbres.

II

Los problemas cuya discusión voy a proponer giran en torno a la pregunta por la justificación moral de la guerra. Francis Bacon escribió que «hay tal justicia impresa en la naturaleza del hombre que no entra en las guerras (que tantas calamidades producen), sino con ciertos motivos y querellas, al menos, plausibles»². Hoy, en realidad, uno de los principales focos de discusión entre la opinión occidental está más bien en si pueden existir en absoluto motivos plausibles para las guerras. Y, desde luego, en la época contemporánea han dejado de considerarse plausibles, hasta carecer de verosimilitud o razonabilidad ética, justificaciones belicistas que tuvieron fuerte boga en tiempos pasados, como la apelación al espíritu de conquista, a la extensión del comercio y la civilización o a la revitalización de las energías de un pueblo apagadas por la molición de la paz. Sin embargo, todavía se siguen considerando plausibles también, según distintos enfoques, dos tipos distintos de motivos básicos para participar en una guerra: la legítima defensa y la intervención humanitaria o en defensa de los derechos humanos. Ahora bien, el sentido en el que estoy utilizando la idea de plausibilidad alude a lo que en nuestro tiempo viene *de hecho* resultando aceptable para la filosofía moral y para la opinión o la conciencia generalizada, por lo que suministra nada más que un marco previo en el que desarrollar la discusión ulterior en busca del criterio *de justicia* o, más justificado, entre los plausibles.

Para facilitar la discusión propondré una distinción conceptual, sin duda algo esquemática, pero suficientemente relevante y significativa, entre tres

oder private Moral? Vom Geltungsgrunde und der Legitimität des Rechts. Festschrift für Ernesto Garzón Valdés, Berlin, Dunker and Humblot, 1992, pp. 429-50.

² «De la verdadera grandeza de los reinos y los estados» (1612), en *Essays* (1625), trad. cast. de Luis Escobar Bareño, *Ensayos*, Barcelona, Orbis, 1985, p. 106.

distintas doctrinas a propósito de la justicia de la guerra. La doctrina central, en torno a la cual giran las principales discusiones desde los dos lados opuestos, es la de la *legítima defensa* de los Estados como única causa legítima de guerra frente a una agresión armada, que bien puede considerarse de pacifismo relativo por las fuertes limitaciones que establece a los motivos justificados de participación en una guerra. En uno y otro extremo de esa doctrina se encuentran quienes la consideran demasiado permisiva, como los partidarios del *pacifismo absoluto*, y quienes, sin llegar a posiciones de belicismo absoluto, la consideran excesivamente restrictiva, es decir, los seguidores actuales de la doctrina tradicional de la *guerra justa*, que también puede calificarse de belicismo relativo.

El *pacifismo absoluto*, que formula una condena tajante de toda violencia bélica, tiene muchas manifestaciones, desde la doctrina vocacionalmente moral de la no violencia activa, de origen gandhiano, hasta el pacifismo radical pasivo de más que dudosa convicción moral, como el egoísta e interesado de quien prefiere perderlo todo antes que arriesgar la vida, que puede ser el germen del colaboracionismo ante un invasor, y desde el pacifismo deontologista del cristianismo radical —al que ahora la Iglesia católica parece ir acercándose resueltamente, según lo muestra el que pocos días antes del comienzo de la guerra del Golfo el Papa Juan Pablo II defendiera «la paz como bien supremo»³—, hasta el pacifismo consecuencialista, como el que expresó en los años más álgidos de la guerra fría Bertrand Russell, cuando escribió que

si hemos de escapar de catástrofes inimaginables, será forzoso que encontremos un camino para *evitar todas las guerras*, sean grandes o sean pequeñas, resulten o no deliberadamente nucleares⁴.

³ No obstante, esta apodíctica expresión no debe leerse aislada del contexto, que la cualifica como meramente tendencial hacia el futuro: «Las exigencias del principio de humanidad nos piden hoy *dirigirnos con decisión* hacia la proscripción absoluta de la guerra, así como cultivar la paz como bien supremo, al que todos los programas y estrategias deben estar subordinados» (Audencia al cuerpo diplomático, 12 de enero de 1991; cit. por Paolo FLORES D'ARCAIS: «Pacifismo, papismo, fundamentalismo», *Claves de razón práctica*, núm. 12, mayo 1991, p. 68; la cursiva, mía).

⁴ *Common Sense and Nuclear Warfare*, Londres. George and Unwin, 1959, p. 29; también hay trad. cast., de A. Lázaro Ros, *La guerra nuclear ante el sentido común*, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, p. 36 (la cursiva, mía).

Recientemente, en la discusión sobre la guerra del Golfo, Ignacio Sotelo ha venido a reproducir este mismo argumento al defender la propuesta kantiana de crear una confederación democrática de naciones, porque aunque estemos muy lejos de ella, «no cabe concebir otra finalidad, si no queremos asistir a la pronta destrucción del planeta». «Acotaciones a la guerra del Golfo. Entre Kant y Clausewitz» (*Claves de razón práctica*, núm. 11, abril 1991, p. 26).

Por su parte, la doctrina de la *guerra justa* o de belicismo relativo antepone la justicia a la paz, pivotando sobre la idea de «justa causa». Aunque en la tradición del *bellum iustum* la noción de justicia no llega a expandirse tanto que comprenda la realización de cualquier valor, como el espíritu de conquista o el progreso de la civilización, tampoco es tan limitativa como en la doctrina de la estricta legítima defensa, y llega a abarcar ciertas violaciones graves de la libertad, de la igualdad o de la seguridad agrupables bajo las rúbricas de la reivindicación de derechos propios ajenos y de la vindicación de las injurias: en términos contemporáneos, aparecen así como motivos justos de guerra, aparte de la legítima defensa ante la violación de la soberanía del Estado, desde las represalias frente a ataques esporádicos, la recuperación de un territorio reclamado históricamente, la reacción frente a un bloqueo económico, la eliminación de un gobierno dictatorial, el rescate de nacionales o el cobro de deudas o indemnizaciones hasta la corrección de cualquier injusticia internacional grave.

Entre las dos anteriores doctrinas, la de la legítima defensa ocupa hoy un lugar no sólo lógicamente intermedio sino también valorativamente central en la medida en que sobre ella gira la discusión contemporánea sobre la regulación jurídica de la fuerza en las relaciones internacionales. En efecto, el Derecho internacional sufre un cambio más o menos radical, según distintas interpretaciones, pero cambio al fin y al cabo, ya a partir del periodo de entreguerras. Es entonces, en agosto de 1928, en concreto, cuando, en el seno de la Sociedad de Naciones, se firma el Pacto Kellogg-Briand, que condenaba el «recurso a la guerra para la solución de los conflictos internacionales» y, por tanto, toda guerra de agresión. Este criterio fue reforzado después de la Segunda Guerra Mundial por los instrumentos jurídicos que dieron lugar al proceso de Nuremberg, que consideraron la agresión bélica como un «crimen contra la paz», y, sobre todo, por la Carta de Naciones Unidas y sus desarrollos, que prohíben a los miembros de la Organización la amenaza o el uso de la fuerza, salvo el «derecho inherente de autodefensa individual o colectiva»⁵. Es cierto que la noción de legítima defensa es lo

⁵ Artículo 51 de la Carta; véase también su artículo 2.4, así como, en desarrollo de la Carta, la *Declaración sobre los principios de Derecho internacional*, de 24 de octubre de 1979 (Res. 2625-XXV) y la *Definición de la agresión*, de 14 de diciembre de 1974 (Res. 3314-XXIX).

Como sugiere en el texto, la interpretación de la nueva posición del Derecho internacional no es unívoca. Cabe sintetizar tres actitudes distintas ante dicho cambio, que al menos en las palabras nadie deja de reconocer. Frente a quienes han defendido la importancia del cambio como un cambio radical, sustentando la teoría de la legalidad jurídico-internacional

suficientemente vaga en el uso común como para admitir algún solapamiento con otros motivos justificados de actuación bélica según la doctrina de la guerra justa, hacia la que podría irse deslizando gradualmente. Eso, sin embargo, constituye una razón para proponer estipulativamente una delimitación de la noción de defensa que, abarcando sólo aquellos casos en los que la justificación de la guerra constituye la excepción, tienda a comprender exclusiva y estrictamente la respuesta bélica a un ataque en curso o del todo inminente y cierto ⁶.

Dentro del anterior marco conceptual, en las páginas que siguen trataré los problemas más básicos de justificación ética de las tres posiciones indicadas. Aprovechando el carácter central de la doctrina de la legítima defensa, analizaré sus posibles méritos y deficiencias, primero, en relación con el pacifismo absoluto y, después, con la doctrina de la guerra justa. Dentro de cada uno de esos dos análisis comparativos, me valdré de la distinción entre justificaciones deontológicas y consecuencialistas —o, por utilizar la famosa distinción de Weber, de *ética de la convicción* (*Gesinnungsetik*) y de *ética de la responsabilidad* (*Verantwortungsetik*)— como instrumento de contraste fundamental para el análisis.

de la guerra sólo en caso de *estricta* legítima defensa, las otras dos actitudes han tendido a volver a la doctrina tradicional bien por el expeditivo camino de impugnar la sensatez, relevancia y aplicabilidad política del Derecho internacional contemporáneo (así, Raymond ARON: *Paix et guerre entre les nations* [1962], trad. cast. de Luis Cuervo, *Paz y guerra entre las naciones*, 2.^a ed., Madrid, Alianza, 1985, pp. 152-158), bien por vías interpretativas más internas, como la de extender y flexibilizar la noción de agresión y, correlativamente, la de legítima defensa (así, en el campo de la filosofía moral, cfr. Eduardo RABOSI: «La ética y la guerra. Algunas reflexiones filosóficas», en E. BULYGIN M. D. FARRELL, C. S. NINO y E. A. RABOSI [comps.], *El lenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro R. Carrió*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983, pp. 381-384; en el campo del Derecho internacional, cfr. Yoram DINSTEIN: *War, Aggression and Self-defence*, Cambridge, Grotius, 1988, pp. 202-229; y con alguna ambigüedad entre la filosofía moral y el Derecho internacional, cfr. Terry NARDIN: *Law, Morality and the Relations of States*, Princeton [N. J.], Princeton University Press, 1983, pp. 282-286), o la de añadir excepciones más o menos estrictas a la legítima defensa, como el estado de necesidad, las «contramedidas», etc. [sobre el *status questionis* de los anteriores aspectos en el actual Derecho internacional, así como en la doctrina correspondiente, véase Cesáreo GUTIERREZ ESPADA: «La responsabilidad internacional del Estado por el uso de la fuerza armada (La conformación del hecho ilícito internacional)», *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1989, apartados I y III].

⁶ La noción de «ataque inminente y cierto», que en inglés se considera no meramente preventivo (*preventiva*) sino «preemptivo» (*preemptive*), sugiere también que las únicas guerras punitivas que podrían considerarse defensivas son aquellas en las que la defensa continúa tras la cesación de la agresión porque esta última vuelve a resultar inminente y cierta. Por lo demás, la delimitación propuesta en el texto no excluye la propiedad de la legítima defensa de terceros.

III

El contraste entre el pacifismo absoluto y la doctrina de la legítima defensa puede ser analizado desde dos ángulos diferentes. Por el primero, cabe insistir sobre todo en la naturaleza y fundamentación de los derechos y deberes de la parte que se defiende, dominando entonces el análisis del problema de la licitud o ilicitud del uso de la fuerza bélica frente a la fuerza ilícita. Por el segundo ángulo, que no deja de reflejar especularmente al anterior, la visión se traslada a los derechos de los terceros afectados por el ejercicio de dicha defensa, dominando el análisis del problema de la violación de los derechos de personas inocentes por ajenas al conflicto.

a) *Los límites morales del pacifismo absoluto.*—La naturaleza de la oposición valorativa entre el pacifismo absoluto y la doctrina de la legítima defensa, tal y como se manifiesta entre quienes deniegan toda justicia a cualquier participación bélica en guerra alguna, sea cual sea su causa, y quienes afirman la legitimidad de la defensa, aparece paradigmáticamente —aunque no exclusivamente— en el pacifismo activo de la no violencia, que es, sin duda, la forma éticamente más defendible de pacifismo absoluto. En aquella oposición, las razones del pacifismo más radical parecen insuficientes y, al fin y al cabo, insostenibles frente a las de ese pacifismo relativo que admite la defensa como causa legítima de participación en una guerra. Por decirlo algo bruscamente, la pretensión de que no hay ninguna guerra justa —incluso cualificada sólo en relación con la guerra actual, debido a la enorme peligrosidad y dañosidad del uso de las armas actuales, también de las convencionales— puede ser el testimonio moral irredento, si bien de una moral tan excelsa como ingenua y desencarnada, de quien niega el mundo y, con ello, se niega a comprenderlo y a actuar eficazmente en él. Su pretensión tal vez sea cambiarlo de raíz, a través de la transformación radical de las conciencias, pero en tanto ese cambio no se produce, sólo puede recurrir a su negación ⁷.

⁷ Coincido así con la argumentación de Ernst Tugendhat sobre este problema en lo que se refiere al que llama «pacifismo basado en una ética de la convicción», que define por mantener «una interpretación absoluta de la prohibición de matar» y una comprensión radicalmente pasiva de [la] moral que lo hace incapaz de intervenir en el mal del mundo» (cfr. «formas de pacifismo», Cuaderno gris, núm. 2, marzo-junio 1991, p. 48). Esta última observación crítica parece igualmente aplicable a otra variante de pacifismo basada en la ética de la convicción a que se refiere Tugendhat: el pacifismo que «rechaza toda guerra, no porque matar sea siempre por principio algo prohibido, sino porque la muerte de inocentes le parece inaceptable», *ibid.*, p. 53), variante ésta de la que me ocuparé en seguida. En

Una ética que quiera operar en el mundo, sin embargo, una ética a la altura de la naturaleza de los conflictos internacionales, no puede dejar de tener presente, debidamente interpretada y corregida, la maquiaveliana admonición de *El príncipe*:

[...] un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, terminará arruinándose entre tantos que no son buenos. Por lo que un príncipe que se quiera mantener es necesario que aprenda a ser capaz de no ser bueno y a usar o no de ello según la necesidad ⁸;

he dicho que la admonición ha de ser debidamente interpretada y corregida en el sentido de que no tiene por qué considerarse por fuerza como una defensa de la política y de la mera efectividad frente a los criterios de corrección ética o moral, siempre que por «ser bueno» se entienda no la única forma de actuar éticamente, sino sólo uno de esos criterios morales propugnados en la historia acaso demasiado excelsos como para que en todos los casos las circunstancias permitan o aconsejen seguirlos: para verlo no hace falta más que sustituir en ese texto las palabras «hombre» y «príncipe» por «Estado».

Tal excelsitud inexigible es la que aqueja, a mi modo de ver, al criterio deontológico de que se debe morir antes que matar, típico del pacifismo absoluto. Ese criterio puede ser encomiable, sin duda, cuando se refiere a la conducta individual que afecta exclusivamente al mismo individuo que la emprende, pero se hace moralmente más que dudoso cuando también se aplica en contextos sociales, donde se debe responder por otros, ante los que parece pertinente adoptar un juicio consecuencialista negativo. El ejemplo de Jim y los indios, que podría presentarse como una fuerte objeción contra un consecuencialismo irrestricto, se transformaría aquí en un típico caso de legítima defensa ante el que no se presenta aquella objeción: en efecto, Jim ya no se ve obligado a elegir entre matar a un indio o, de lo contrario, dejar que el capitán mate a veinte, sino que se encuentra en la

cambio, la crítica que propongo en el texto no es aplicable al pacifismo que Tugendhat considera inspirado por la ética de la responsabilidad, para el cual «el rechazo categórico de la guerra no se basa en la prohibición de matar, sino en la experiencia de que todas las guerras, ciertamente las guerras modernas, ocasionan una cantidad tan enorme de sufrimiento y destrucción que de todas maneras parece sobrepasar lo que una guerra podría justificar» (*ibid.*, p. 48). En realidad, la calificación como «categórico» de este tipo de rechazo de la guerra resulta impropia, según lo prueba el que, como reconoce Tugendhat, esa forma pueda llegar a admitir la justicia de algunas guerras proporcionadas y basadas en la legítima defensa (cfr. *ibid.*, pp. 53-54).

⁸ *Il principe e Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, a cargo de Sergio BERTELLI e introducción de Giuliano Procacci, Milán, Feltrinelli, 5.^a ed., 1977, cap. XV, p. 65.

alternativa de matar al capitán cuando éste se dispone a disparar sobre cualquiera de los indios ⁹.

El contraste entre deontologismo y consecuencialismo se manifiesta también en el distinto tipo de crítica al pacifismo absoluto: de un lado, para una estructura moral de tipo consecuencialista, la posición del pacifista absoluto es irresponsable y moralmente incorrecta sin paliativos; de otro lado, para una estructura moral de tipo deontológico distinta a la del pacifismo absoluto, que sustente el principio *vim vi repellere licet*, aquel pacifismo puede mantener una posición equivocada, pero heroica y elogiabile. Pues bien, tal vez este contraste entre criterios opuestos, en el que no es fácil elegir, pueda aliviarse según el punto de vista que se adopte: desde el punto de vista de los Estados —es decir, de los responsables de salvaguardar la vida y demás derechos de los ciudadanos— la defensa parece obligada y el pacifismo absoluto se muestra como irresponsable e inmoral, pero desde el punto de vista de las conductas individuales de los individuos ordinarios la actitud pacifista absoluta puede aparecer como permitida y hasta heroica. No obstante, en una hipotética situación límite en la que debiera darse la primacía a uno u otro de los dos criterios, parece superior el punto de vista consecuencialista, que tiene en cuenta antes la salvación de otros que la de la propia alma y que intenta que la injusticia de la agresión no consiga su objetivo.

Naturalmente, objeciones como las que anteceden presuponen ciertos sobreentendidos a propósito de la ineficacia general (compatible con la aceptación de alguna eficacia ocasional) de la no violencia activa predicada por Ghandi, que si, en cambio, fuera eficaz podría ser la única forma de pacifismo absoluto capaz de superar la anterior réplica consecuencialista y ofrecerse como la posición preferible. Sin embargo, la mejor prueba de que la no violencia activa no puede ser generalmente eficaz como alternativa a la respuesta violenta defensiva está en que si se dieran las condiciones necesarias para tal eficacia general, también serían imposibles las condiciones que hacen posible la agresión y, por tanto, la propia doctrina sería superflua. En particular, es por ahora impensable un mundo en el que la ya de por sí hercúlea tarea de despertar en los agresores una actitud humanitaria mediante los métodos

⁹ El caso, como es sabido, fue formulado por Bernard Williams en términos de una única alternativa: o matar a un indio o dejar que el capitán mate a veinte, pero la transformación que sugiero en el texto implica que también es posible la segunda alternativa, expresamente excluida por Williams, de que Jim tenga algunas posibilidades de hacerse con la situación amenazando, e incluso matando, al capitán (cfr. «A Critique of Utilitarianism», en J. J. SMART y B. WILLIAMS, *Utilitarianism: For and Against*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1973, pp. 69-70, trad. cast. de Jesús Rodríguez Marín, «Una crítica del utilitarismo», en *Utilitarismo: pro y contra*, Madrid, Tecnos, 1981, pp. 108-109).

de la no violencia lograra además, también por medios puramente persuasivos, que nadie entre los agredidos adoptara una respuesta violenta que diera lugar a represalias del primero y encendiera una nueva espiral de violencia.

b) *Inocencia y derechos.*—Como se dijo, las consideraciones anteriores están enfocadas, sobre todo, desde el ángulo de los derechos (o falta de derechos) de quien se defiende, pero el ángulo de mira puede trasladarse, sin merma de los mismos resultados críticos, al ángulo de los derechos de las personas frente a las que se realiza la defensa. De este modo, el argumento absolutista y deontológico contra la guerra puede insistir en su condena alegando la maldad intrínseca de la acción de matar inocentes, que parece inevitable en prácticamente cualquier guerra. De tal tipo es, creo, una variante del pacifismo que Ernst Tugendhat considera basado en la ética de la convicción y a la que caracteriza por la creencia de que «toda guerra moderna trae la muerte de inocentes, y [...] la muerte de un solo inocente ya es demasiado»¹⁰; en relación específica con la guerra del Golfo, Luigi Ferrajoli ha ejemplificado bien este punto de vista:

No hay duda de que Sadam Hussein cometió con la ocupación de Kuwait un crimen gravísimo. Pero ningún crimen justifica la matanza de decenas de miles de inocentes cuya única culpa consistía en ser gobernados por un dictador feroz e irresponsable¹¹.

Esta posición es seguramente una aplicación del criterio de que la guerra —o, al menos, la guerra actual— es siempre injusta porque, al castigar de manera inevitable a la población civil, impone dar muerte a inocentes¹². Pero es interesante incluir también en la discusión una forma más amplia en la que esa misma posición puede —y, según creo, suele— ser entendida, hasta considerar injusta toda guerra por atacar necesariamente al pueblo llano que, civil o militar, es inocente de las acciones de sus dirigentes. Entendido de esta última y amplia forma, las objeciones que merece este criterio, en cuanto criterio general, son, al menos, tres (todas ellas compatibles, por supuesto, con la tesis específica de que la guerra de 1991 contra Irak pudo ser injusta por la razón recién aducida), de las cuales sólo las dos últimas son

¹⁰ «Formas de pacifismo», cit., p. 53.

¹¹ «La guerra y el derecho», *Jueces para la democracia. Información y debate*, núm. 11, diciembre 1990, p. 4.

¹² En el texto de Ferrajoli no resulta tan claro como en el de Tugendhat que la inocencia en este contexto se debe identificar con la no beligerancia, tema al que me referiré en seguida.

aplicables a la forma inicial y más restringida del argumento, relativa a la muerte de inocentes en cuanto no beligerantes.

En primer término, la idea de inocencia no significa lo mismo cuando se aplica a la conducta bélica que a las relaciones interpersonales ordinarias, donde la legítima defensa es posible sólo ante una agresión ilegal, esto es, carente de inocencia en cuanto antijurídica, aunque no necesariamente culpable en el sentido técnico y restringido de realizada con suficiente conocimiento y voluntariedad. En la conducta bélica, en cambio, la inocencia nada tiene que ver con tal conocimiento y voluntariedad —es decir, con la aceptación consciente de la guerra agresiva emprendida por el propio país—, sino con la beligerancia en cuanto conducta de dirección o de ejecución de la violencia armada en que las actividades bélicas consisten. Conforme a ello, tanto puede haber no beligerantes —y, por tanto, no susceptibles de ataque directo— que sean culpables de la guerra en un sentido moral o político por haberla apoyado, cuanto beligerantes —y, por tanto, susceptibles de ataque— que han sido obligados a luchar en una guerra cuyos motivos no comparten en absoluto ¹³.

En segundo término, la inevitabilidad que se ha de atribuir a la producción de daños a no beligerantes para condenar toda guerra moderna es una presunción inapropiada al menos en dos sentidos diferentes. De un lado, porque no es literalmente inevitable en toda guerra actual, según lo muestra la guerra de Las Malvinas, sino, todo lo más, probable en determinados tipos de guerra, que, en tal caso, serían las únicas condenables de ser aceptable el criterio de que no se debe causar daño a no beligerantes. De otro lado, aunque fuera cierto como proposición general que son prácticamente inevitables ataques a población civil —siempre bajo el supuesto de que éstos son injustos en todo caso—, la conclusión moral directa que de ello se derivaría no es que iniciar o participar en una guerra sea siempre y necesariamente injusto, sino que quienes ordenan y realizan tales ataques actúan inmoralmemente: análogamente, aunque salvando las distancias, el hecho de que la industrialización rápida de una zona permita afirmar que se hará prácticamente inevitable un cierto grado de delincuencia no convierte necesariamente en inmoral la decisión política de tal industrialización. Es aceptable, en cambio, la afirmación de que una determinada guerra puede ser injusta debido a los ataques injustificados a los no beligerantes, pero esto exige un juicio de proporcionalidad en el caso concreto que necesariamente ha de ocurrir *a posteriori*. En suma, únicamente podría darse un juicio desfavorable sobre la injusticia de cualquier

¹³ Sobre todo ello, cfr. mi *La justicia de la guerra...*, cit., esp. cap. IV y pp. 301-308, así como la bibliografía allí citada.

guerra hoy si fuera cierto que toda guerra produce inevitablemente daños injustos y desproporcionados a la población civil. Tal afirmación, sin embargo, está bien lejos de ser indiscutible.

En tercero y último término, tampoco el principio más estricto de que no se debe producir ataque alguno a no beligerantes resulta convincente tomado de manera incondicionada. Así, no son injustos, o, al menos, no lo son de manera evidente, ni los daños indirectos que se producen en la población civil como efecto colateral y no buscado de ataques a objetivos militares que guardan la medida como medios proporcionados al fin defensivo de la guerra, ni los daños en esa misma población como consecuencia de errores difícilmente salvables o no imprudentes: en cierto sentido, el conocimiento previo de estos resultados no queridos es probabilístico, similar al que se tiene de las muertes probables por accidentes de circulación en un país, cuya previsión no se considera que —salvo en circunstancias especiales y concretas, como la negligencia por no reparar en un punto peligroso o por no avisarlo— conlleve responsabilidad moral alguna para los dirigentes políticos. Es verdad, con todo, que la discusión moral sobre este problema, ante el que se aducen dudosas doctrinas morales alambicadas y *ad hoc*, como la doctrina del doble efecto, se encuentra lejos de estar resuelta, pero eso mismo muestra que tampoco el criterio absolutista está cercano a la evidencia o a la indisputabilidad¹⁴. También en este tercer punto, como en el anterior, debe jugar el necesariamente abierto pero insustituible criterio de la proporcionalidad, que juega en un marco consecuencialista. En realidad, este criterio queda vaciado de sustancia, y sobra su previa alegación, cuando se sostiene que la muerte de un solo inocente hace injusta cualquier guerra (lo que, por cierto, seguramente es predicable no sólo de las guerras actuales, sino de casi todas las guerras, excluyendo de forma tajante sólo los combates caballerescos realizados por paladines, que eran más bien una forma estilizada y simbólica de guerra). Sin embargo, la noción de proporcionalidad se opone a esta tesis, seguramente poco verosímil o razonable y que probablemente no deja de aparecer tras la citada afirmación de Ferrajoli de que «ningún crimen justifica la matanza de decenas de miles de inocentes», pues allí parece sobreentenderse que tal vez haya crímenes que, al menos en ciertas y limitadas circunstancias, puedan llegar a excusar la muerte de algunos inocentes. En todo caso, esa conclusión es la que adopta la doctrina de la legítima defensa en relación con la guerra.

¹⁴ Cfr. *ibid.*, esp. pp. 146-150, 243 y 306-308, con la bibliografía allí citada.

IV

Si en el contraste entre la doctrina del pacifismo absoluto y la de la legítima defensa no ha resultado particularmente difícil ni compleja la adopción de la posición mejor justificada, no creo que pueda afirmarse lo mismo respecto del contraste entre la doctrina de la legítima defensa y la de la guerra justa. Para el análisis de este último ordenaré la discusión directamente en torno a la diferencia entre el enfoque deontológico y el consecuencialista.

a) *La argumentación de carácter deontológico.*—Desde el punto de vista de una argumentación genérica basada en un marco moral deontológico, la discusión entre las dos anteriores doctrinas sobre la guerra puede reducirse a la del alcance o relevancia moral que debe otorgarse al valor de la justicia en relación con el de la paz. En ese contraste, cuanto mayor extensión se otorgue a la idea de justicia como motivo aceptable de guerra, menor extensión se dará al valor de la paz, y a la inversa. Seguramente, el intento más defendible de justificación de la guerra de carácter deontológico es el que se apoya en último término en los derechos y deberes de los individuos agredidos tal y como resultan modelados por una realidad internacional de distintos Estados que, a su vez, tienen reconocido el derecho a un ejercicio sin injerencias externas de la soberanía sobre el territorio nacional correspondiente ¹⁵.

Sin embargo, parece difícil justificar la supremacía del valor de la paz casi a toda costa, como hace la doctrina de la legítima defensa salvo en caso de injusticia estricta mediante una agresión armada. En realidad, si

¹⁵ Presupongo aquí sin crítica el carácter deontológico de la argumentación habitual que defiende los derechos básicos como fundamento de las restricciones a la conducta libre del resto de los individuos. Esta argumentación no es necesariamente absolutista y, más aún, si pretende justificar la guerra, difícilmente puede serlo. En rigor, tal vez no pueda serlo en ningún caso, al menos si quiere mantener criterios morales a la vez verosímiles y lo suficientemente ricos como para servir a la vida moral real, salvo que se presuponga una completa y compleja jerarquización entre distintos derechos y una amplísima tabla de cualificaciones o excepciones para, al menos, la mayoría de ellos. En tal caso, es claro que la mayor parte de los derechos básicos, si no todos, no pasarían de ser, en el mejor de los casos, sino sólo relativamente absolutos, en el sentido de que se han de limitar entre sí en caso de conflicto entre derechos distintos o autolimitarse en caso de conflicto en la aplicación de un mismo derecho. No obstante, parece razonable mantener que la relativización del alcance y contenido de los derechos básicos, a partir de un determinado punto, desplaza su fundamentación desde una matriz moral deontológica a una justificación en términos puramente consecuencialistas. Esta conclusión depende en buena parte de cómo se defina el consecuencialismo frente al deontologismo y de donde se ponga su respectiva frontera, lo que es un tema que admita desarrollo aquí: sobre ello puede verse Juan Carlos BAYON: «Causalidad, consecuencialismo y deontologismo», *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, núm. 6, 1989, pp. 466-480.

la razón de la justificación de la guerra defensiva está en la garantía de los derechos a la vida, la libertad, la dignidad, etc., de los agredidos, podría preguntarse cómo diferenciar en calidad esos derechos de los que están en juego en situaciones que constituyen agresión en sentido amplio. Existen al menos tres supuestos diferentes de extensión de la idea de agresión que permitirían un desplazamiento y una ampliación de la justificación estricta de la legítima defensa hasta la justificación más amplia de la doctrina de la guerra justa y cuyo análisis servirá para poner de manifiesto el problema: las intervenciones humanitarias de terceros, la «defensa retrospectiva» o frente a lo que se considera una agresión permanente y la guerra en prevención de una agresión futura.

aa) *Derechos individuales e intervenciones humanitarias.*—Si los derechos de los Estados no son independientes sino derivados de los derechos que corresponden a los individuos afectados, no deja de ser problemática y en último término difícil de justificar la distinción usada por Michael Walzer entre intervenciones humanitarias estrictas y lícitas, por las que un tercer Estado actúa con el limpio propósito de hacer frente a gravísimas violaciones de los derechos humanos más elementales, tales como el genocidio y la matanza o la esclavización masiva de la población, e intervenciones contra gobiernos autoritarios, que resultarían ilícitas ¹⁶. Si lo que justifica el recurso a la fuerza bélica es la defensa de los derechos humanos, creo que tiene razón Fernando Tesón al criticar la posición de Walzer como infundada y al proponer la licitud (moral y jurídica) de todo uso proporcionado de la fuerza armada frente a cualquier violación o privación grave de los derechos básicos por parte de cualquier Estado, lo que incluye la legitimidad de la intervención humanitaria para derribar gobiernos dictatoriales ¹⁷. El problema de fondo es que apelar al criterio de las violaciones gravísimas de los derechos más básicos remite a una distinción gradual, con una inevitable y ancha zona intermedia de casos dudosos que difícilmente puede dividirse con arreglo a un criterio aceptable.

¹⁶ Así, cfr. Michael WALZER: *Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations* (1977), 3.ª ed., London, Penguin Books, 1980, pp. 101-108, trad. cast. de Atanasio Sánchez, *Guerras justas e injustas*, Buenos Aires, Goyanarte Editor, 1980, pp. 133-141; y «The Moral Standing of States: A Response to Four Critics», *Philosophy and Public Affairs*, vol. 9, primavera, núm. 3, 1980, pp. 209 y ss.

¹⁷ Cfr., para la crítica a Walzer, Fernando R. TESÓN: *Humanitarian Intervention: an Inquiry into Law and Morality*, Dobbs Ferry, Transnational Publishers, 1988, pp. 88-94; en cuanto a la propuesta positiva de Tesón, a la que está dedicada el libro entero, puede verse sintetizada en el cap. 6 y en las pp. 245-249.

El criterio divisorio que parece más razonable, derivado por analogía de la comparación con los derechos individuales violados por una agresión militar de un Estado distinto con ocupación de territorio, presenta una alternativa difícil para la anterior justificación deontológica de la doctrina de la legítima defensa: o bien habría de considerar injustificada la defensa ante una agresión externa (o ante un régimen colonial) que mediante una ocupación paternalista y benévola se limitara exclusivamente a excluir la autonomía política de la población pero no otros derechos básicos, o bien habría de admitir que está justificada la defensa por parte de terceros frente a todo régimen político que, como mínimo, deniegue los derechos estrictos de participación política a la inmensa mayoría de sus habitantes o, incluso, a una minoría de ellos injustamente discriminada. En el primer caso negaría o, al menos, restringiría sensiblemente el derecho de defensa frente a agresiones externas, en el segundo ampliaría notablemente ese mismo derecho ante regímenes simplemente autoritarios y en ambos parece que incurriría en una solución claramente infundada en términos de legítima defensa, sea por quedarse corta al no justificar al defensor de buena fe frente a una agresión armada a un tercero, sea por pasarse de largo al convertir al defensor en justiciero de la violación de los derechos ajenos ¹⁸.

ab) Las guerras preventivas.—Al supuesto anterior se añade otro que, para una posición deontológica, pone en duda las razones de principio para diferenciar, según pretende la doctrina de la legítima defensa, entre los ataques «preemptivos» —esto es, en repuesta a una agresión inminente y cierta— y los ataques simplemente preventivos —esto es, ante una posible agresión futura que, por tanto, no resulta inminente o es incierta—. Para una posición que justifique sólo una legítima defensa estricta, solamente los ataques «preemptivos», y como último límite, constituirían un acto de defensa y no de agresión, mientras que los preventivos serían agresivos y no defensivos. Frente a una distinción tajante entre ataque (si no se identifica con agresión) y defensa,

¹⁸ Esta última es, precisamente, la posición de Tesón, que difícilmente podría considerarse integrada en la doctrina de la legítima defensa, por más que tanto esta última como la intervención humanitaria se pretendan justificadas conforme a idénticas razones morales de salvaguardia de los derechos humanos (cfr., *ibid.*, pp. 67 y 153, entre otras). Por el contrario, lo que más bien muestra la sólida argumentación de Tesón es que desde un punto de vista moral deontológico basado en la primacía de los derechos humanos lo coherente es concluir defendiendo una versión actualizada de la clásica doctrina de la guerra justa, que no puede justificar exclusivamente las guerras defensivas salvo que el término «defensa» se entienda en una amplísima e inusitada significación ajena a la que ha llegado a adquirir en lo que aquí vengo considerando doctrina de la legítima defensa.

se comprende la negativa de una posición deontológica como la de Gertrude Anscombe:

La actual concepción de la «agresión», como otras tantas concepciones incluyentes, es mala. ¿Por qué ha de ser malo el dar el primer golpe en combate? La única cuestión es: quién tiene razón, si la tiene alguien ¹⁹.

En realidad, la única razón aparentemente sólida para preferir la doctrina de la legítima defensa sobre la que propicia la extensión a la mera prevención la suministra el criterio de la seguridad internacional. Por este argumento se pretende evitar una proliferación previsiblemente incontrolable de los conflictos bélicos, de modo que no se verifique el modelo típico de los pistoleros del cine del Oeste tan eficazmente descrito por Thomas Schelling en relación con la disuasión nuclear:

él, creyendo que yo estaba a punto de matarle en defensa propia, estaba a punto de matarme en defensa propia, de modo que yo tuve que matarle en defensa propia ²⁰.

ac) *La agresión permanente y la «defensa retrospectiva»*.—El último supuesto que sirve para resaltar las dificultades de una justificación deontológica de la doctrina de la legítima defensa proviene del juego de la posible distinción entre la defensa estricta frente a una agresión en curso y la defensa retrospectiva frente a una «agresión permanente». La diferencia básica entre las dos situaciones se suele formular, incluso en el campo del Derecho internacional, apelando a uno de los tres requisitos de la legítima defensa, que sólo concurriría en la defensa estricta: la inmediatez (los otros dos son la necesidad y la proporcionalidad) ²¹. Es obvio que la exigencia de inmediatez puede ser fuertemente diluida, por no decir anulada, si el concepto de agresión se extiende desde el caso estricto de una acción militar sólo durante el curso de su despliegue, es decir, durante un ataque armado en curso, al caso del desarrollo ulterior de esa agresión, cuando no hay una resistencia suficiente durante el ataque y se produce una ocupación armada que se impone contra

¹⁹ «War and Murder» (1961), en Walter STEIN (comp.): *Nuclear Weapons: A Catholic Response*, London-New York, ahora, por donde se cita, en *The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe*, vol. 3, *Ethics, Religion and Politics*, Oxford, Basil Blackwell, 1981, p. 52.

²⁰ *The Strategy of Conflict* (1960), trad. cast. de Adolfo Martín, *La estrategia del conflicto*, Madrid, Tecnos, 1964, p. 260.

²¹ Cfr. sobre ello Martín ORTEGA CARCELEN: *La legítima defensa del territorio del Estado. Requisitos para su ejercicio*, Madrid, Tecnos, 1991.

la voluntad de los habitantes del país. Es mediante tal extensión con la que se abre paso, frente a la legítima defensa en sentido estricto, la doctrina de la «agresión permanente» o de la «defensa retrospectiva» ²².

Pero la cuestión es que, desde un punto de vista deontológico que tenga en cuenta los derechos de los afectados, la distinción anterior es tan poco decisiva como en el caso de las intervenciones humanitarias la distinción entre que los ciudadanos de un país se encuentren impotentes ante el yugo de la opresión o hayan logrado rebelarse contra ella. En general, los derechos de los ciudadanos de un país ocupado o colonizado resultan tan violados cuando comienza el régimen opresivo como una vez consolidado, por lo que la distinción entre defensa estricta y defensa retrospectiva resulta difícil de justificar deontológicamente. Y si, más en concreto, esa distinción entre defensa estricta y defensa retrospectiva resulta difícil de justificar deontológicamente. Y si, más en concreto, esa distinción se traslada a las situaciones internas de violación de derechos, transformándose en la distinción entre intervenciones indirectas o coadyuvantes a una población que se resiste frente a la violación de sus derechos básicos, que resultarían permitidas, e intervenciones directas o de pura iniciativa exterior, que estarían excluidas, podría llegarse al paradójico resultado de negar el derecho a intervención ante regímenes políticos tan salvajes como el de Pol Pot en Camboya, mientras se admitiría la intervención frente a cualquier sistema autoritario que, debilitado o ya en declive, apenas replicara los desórdenes violentos que tratan de hacerlo caer.

En todo caso, también aquí la única respuesta posible ante esa extensión de las causas justas de guerra puede ser nada más que consecuencialista, mediante un argumento que viene a reconocer éticamente la fuerza de los hechos, y el hecho de la fuerza, en aras de la seguridad internacional frente a una justicia ampliamente entendida pero probablemente desestabilizadora. Esa consideración consecuencialista ha sido esencial, me parece, durante la época de la bipolaridad, cuando un criterio más intervencionista seguramente habría aumentado en forma desmesurada no sólo el número de conflictos bélicos, sino el riesgo de guerra entre las superpotencias, pero es dudoso que haya perdido toda su validez tras el actual proceso de distensión y unipolarización internacional.

²² Esta doctrina fue desarrollada por Nehru para justificar la ocupación de la isla de Goa en 1961 (cfr. Martín CEADEL: *Thinking about Peace and War*, Oxford, Oxford University Press, 1989, pp. 84-85).

De una u otra forma, probablemente lo más difícil de soslayar para la justificación deontológica que mantiene la indisoluble derivación de los derechos de soberanía estatal a partir de los derechos individuales es la superación de la doctrina de la legítima defensa en favor de una nueva versión de la doctrina de la guerra justa, por lo demás bastante generosa en la aceptación de sus causas de licitud. Sin perjuicio de volver en seguida sobre los argumentos consecuencialistas en general, no será inoportuno avanzar ahora el riesgo serio, por más que difícilmente cuantificable y evaluable en general, de que la aplicación de los anteriores criterios deontológicos pueda producir un mucho mayor daño, cualitativo y cuantitativo, a los propios derechos básicos que el producido por la aplicación de criterios más restrictivos, como los que soportan la doctrina de la legítima defensa ²³.

En síntesis, con independencia de la complejidad interpretativa y aplicativa de la doctrina de la legítima defensa y del belicismo relativo, la razón por la que una fundamentación deontológica estricta —es decir, exenta de consideraciones consecuencialistas— no permite justificar bien, en mi opinión, la supremacía que al valor de la paz sobre el de la justifica se atribuye en la primera de aquellas dos doctrinas está en su apelación misma a los derechos individuales. En efecto, los derechos individuales —e, indirectamente, colectivos— puestos en peligro o violados mediante una agresión armada en curso, que es la única y estricta causa de legítima defensa para el pacifismo relativo, no resultan menos puestos en peligro por un régimen interior opresivo de la propia población que ante una agresión muy probable pero no inminente ni cierta, como tampoco resultan menos violados cuando la agresión se ha consumado y se mantiene un régimen de ocupación no consentido por la población. En el primer caso se justifica la guerra de intervención humanitaria en el sentido más amplio, en el segundo, la guerra de prevención pura (y no meramente la de prevención inmediata o «preemptiva»), en el tercero, la defensa retrospectiva ante una agresión permanente, y en los tres se sale

²³ En desarrollo de lo dicho en la nota 15, puede observarse ahora que este tipo de crítica, aunque preocupada por los derechos y libertades básicos, tiene carácter consecuencialista. En esa misma dirección puede verse la argumentación de Terry NARDIN frente a la crítica del principio de no intervención en los derechos humanos (cfr. *Law, Morality...*, cit., pp. 238-240 y 272): tras comenzar afirmando que el Derecho internacional tiene en cuenta, siquiera sea indirectamente, la libertad y los derechos individuales, Nardin concluye que «no es claro que debilitar las limitaciones tradicionales sobre la intervención, especialmente de la intervención armada, promoverá mejor la libertad individual que mantener el respeto por el principio de no intervención (junto con sus reconocidas excepciones)» (*ibid.*, p. 240); como se puede ver, lo que Nardin está poniendo es realizar una comparación de consecuencias previsibles de la aplicación de dos criterios opuestos donde la libertad individual aparece como objeto de un mero balance global.

del marco estricto de la legítima defensa para entrar en el de la doctrina de la guerra justa.

Esta transición de la justificación de la legítima defensa a la de la guerra justa, que viene particularmente facilitada por la naturaleza gradual del paso de un concepto al otro, me parece inevitable en cualquier aproximación deontológica que se apoye en el valor de los derechos individuales básicos. Naturalmente, esta conclusión no dice nada por sí misma a propósito de la justificación última del enfoque deontológico, sino que simplemente formula la tesis de que, desde ese enfoque, parece mucho más factible y coherente justificar la doctrina de la guerra justa que la de la legítima defensa estrictamente entendida. Con independencia de que se acepte o no un marco deontológico como el que aquí se ha analizado, la conclusión anterior merece ser contrastada con los resultados a que conduce el análisis del problema desde un enfoque consecuencialista.

b) La argumentación de carácter consecuencialista.—En realidad, si no estoy equivocado, las razones morales que más sólidamente cabe alegar en favor de la doctrina de la legítima defensa son de carácter consecuencialista, por más que, como inevitablemente tiende a ocurrir con tales razones, dejen un buen espacio para la discusión y el margen de duda. Para evaluar en términos generales el contraste entre las doctrinas de la legítima defensa y de la guerra justa consideraré, lógicamente, el punto de vista del consecuencialismo de la regla o indirecto, que intenta extraer un criterio general para un tipo de conducta a partir de una evaluación de sus consecuencias previsibles. Cuando la conducta en cuestión es la iniciación, intervención o participación en una guerra, se ha convertido en moneda corriente la argumentación de que el recurso a la guerra, sea por sus previsibles consecuencias inmediatas o por las acumulables en el futuro, tiende a carecer de proporcionalidad con los males que trata de evitar salvo, todo lo más, en defensa frente a una agresión en curso.

Dentro de este enfoque consecuencialista conviene distinguir dos argumentos básicos que se aducen para limitar el ámbito de las causas justificadas de participación en una guerra: el primero, el riesgo de proliferación bélica y, con ello, de escalada desde un conflicto bélico localizado hasta una conflagración global, en el límite incluso nuclear; y el segundo, la enorme dañosidad de las armas actuales, incluidas las llamadas convencionales, en comparación con los males que la guerra trata de evitar. Ambos argumentos, que se han repetido por activa y por pasiva durante los años de la disuación nuclear,

son conceptualmente compatibles entre sí, pero su alcance es diferente. En particular, mientras el primer argumento coincide con la apelación a la *seguridad internacional* y compensa, por así decirlo, el sacrificio de excluir la reivindicación armada de los derechos o de la justicia (salvo, claro está, en el extremo caso de la estricta legítima defensa) con la evitación de nuevos y más generalizados conflictos bélicos en el futuro previsible, el segundo argumento apela a la *proporcionalidad concreta* entre los daños evitados y los producidos por la guerra y compensa aquel mismo sacrificio de excluir el recurso a la guerra en reivindicación de la justicia no con los conflictos y daños futuros previsiblemente evitados sino con los daños efectivos de cualquier conflicto por sí solo y aisladamente considerado. Esa diferencia puede ser muy relevante a la hora de aplicar una y otra argumentación a la situación internacional presente y del más o menos entrevisible futuro.

El argumento de la seguridad internacional alienta a la máxima limitación de los conflictos bélicos para no propiciar una desestabilización generalizada y es perfectamente razonable y coherente con él que esa limitación se identifique con la respuesta defensiva sólo contra las agresiones armadas en curso, hasta considerar agresión tanto el ataque de simple o pura prevención —es decir, ante una agresión eventual, no cierta o no inminente— como la acción militar en reivindicación de un derecho al territorio frente a una ocupación militar injusta pero ya consolidada. Sin embargo, tras la distensión internacional propiciada por los recientes y radicales cambios en el Este europeo y la creciente hegemonía internacional de los Estados Unidos, no parece descabellado afirmar que, por el momento al menos, ese peligro de desestabilización creciente ha desaparecido en buena parte de la escena, y eso podría alentar la tentación de relajar el criterio.

En particular, en la medida en que se pudiera ir consolidando la hegemonía de los Estados Unidos hasta convertirse, siquiera fuera mediante la interposición del Consejo de Seguridad, en cuasimonopolizadora del control internacional, y supuesto que su dominio alcanzara también, al menos políticamente, a las armas nucleares, el argumento de la seguridad internacional tendería a dar un giro de 180 grados hasta, tal vez, propiciar una desembocadura hobbesiana. Según semejante diseño, un soberano —en este caso, una superpotencia hegemónica común a los demás Estados— impone la paz al conjunto de los demás sujetos —en este caso, sujetos estables—, pero permitiéndose también actuar como árbitro para cualquier disputa entre éstos a propósito de la justicia o los derechos que les asisten. El argumento de la seguridad internacional inclinaría entonces a dar un paso desde una regla

que justifica sólo la legítima defensa a una que justifica la guerra justa, si bien la aplicación de esta última doctrina quedaría detraída ahora de la omnimoda voluntad de las partes para ser, cuando menos, supervisada por la superpotencia soberana.

Ni que decir tiene que esta eventualidad sería una solución en principio internacionalmente autoritaria y en absoluto democrática, donde la justicia y los derechos así garantizados corresponderían a una tradición tal vez universalista pero es de temer que sesgadamente interpretada en beneficio de sus propios aplicadores. No obstante, nada de ello dejaría de ser perfectamente coherente con la primacía del valor de la paz y el orden que subyacen al argumento de la seguridad internacional y, en último término, a la propia doctrina de la legítima defensa. Es cierto que toda la fuerza del cambio de signo de la argumentación en favor de ese soberano internacional autoritario pero a la vez pacificador y justiciero reside en la previsibilidad de la consolidación de la actual tendencia al afianzamiento de una única superpotencia internacional con capacidad suficiente de decisión y actuación. Pero supuesta esa configuración internacional, el argumento consecuencialista de la paz y la seguridad no dejaría de confluir en una nueva versión de la doctrina del *bellum iustum*.

En cambio, el segundo argumento, relativo a la proporción concreta entre la dañosidad de las armas actuales y los males que tratan de evitar, podría seguir siendo favorable a una restricción del criterio justificatorio de la guerra exclusivamente a la legítima defensa estricta incluso en el caso de que la seguridad internacional fuera salvaguardada por la superpotencia hegemónica. Y ello al menos en tanto no se produjera un severo desarme, tanto cualitativo como cuantitativo, para todos los Estados excepto para el hegemónico, que permitiera controlar mesuradamente a este último sus utilizaciones de la fuerza. De todos modos, tampoco cabe ocultar que, en sí mismo —y, por tanto, aun sin ese hipotético desarme—, este argumento tiene un alcance limitado: dice nada más que, en principio o tendencialmente, sólo la violación de la paz mediante una agresión (lo que, no se olvide, también conlleva injusticia, y muy grave), pero no la simple violación de la justicia, incluido el caso de las agresiones consolidadas, puede ser causa proporcionada de uso de los terribles medios bélicos actuales. Ahora bien, en cuanto puramente tendencial el argumento tiene límites, y límites bien comprobables en el pasado reciente: de una parte, ha habido guerras defensivas que han violado la proporción (un caso paradigmático de desproporción, aunque su carácter defensivo sea discutido y menos claro, es la guerra del

Golfo), y, de otra parte, ha habido guerras de reivindicaciones de derechos que no la han violado (un ejemplo muy claro es el de la guerra a que dio lugar la invasión de las Malvinas por Argentina).

VI

¿Qué concluir de todo lo anterior? No, desde luego, un paso rápido y acritico a la doctrina de la guerra justa, aun con renovados ropajes. Es verdad que si en el período de la disuasión y la bipolaridad internacional los argumentos consecuencialista tendían a avalar claramente un criterio general de la máxima restricción posible de la legitimidad de la guerra hasta reducirla a la defensa estricta de una agresión, la ruptura de la bipolaridad ha venido a oscurecer las razones y virtudes de ese criterio. Sin embargo, ese oscurecimiento no ha dado paso a una nueva claridad que permita ver las razones y virtudes de invertir todas las tornas hasta volver a ver en la guerra o en su amenaza un medio de realización de la justicia y de la propia seguridad internacional: piénsese que con arreglo a esa doctrina podrían justificarse, de un lado, la invasión por parte de los países árabes de, al menos, los territorios ocupados por Israel en 1967 y, de otro lado, ciertas intervenciones humanitarias en favor de la democracia y los derechos humanos por parte de cualquier país occidental, incluido Israel, contra la mayor parte de los Estados que componen la llamada comunidad internacional, incluidos prácticamente todos los países árabes. De las presentes insuficiencias de la doctrina de la legítima defensa no cabe extraer confiadamente los futuros beneficios de la doctrina de la guerra justa, que plantea problemas que no tienen fácil solución o, al menos, cuya aparente solución no nos satisface porque nos enfrenta a una situación inédita, compleja y temible. Bajo la suposición de que la configuración de esa hegemonía mundial fuera viable y estable, Norbert Elias expresó muy bien una aguda ambivalencia que resulta sensato compartir:

No hablo aquí de mis deseos. Es cierto que yo mismo no me encontraría bien en un mundo donde un Estado o un grupo de Estados dominara a toda la humanidad. De todos modos, podríamos preguntarnos si la supremacía de un Estado más poderoso que todos los demás sería una precio demasiado elevado para la pacificación de la humanidad, o sea, para la eliminación de la guerra como institución permanente en las relaciones internacionales. [...] tal vez merecería la pena pagar por lo menos durante un tiempo el precio del sometimiento a un Estado hegemónico y de soportar

la altanería, siempre presente en estos casos, del pueblo dominante. [...] Una vez más, no deseo para mí ni para ustedes vivir en un mundo con semejante estructura social ²⁴.

Naturalmente existe una solución fácil en las palabras y difícil en los hechos para resolver la anterior ambivalencia: la propuesta de un control internacional efectivo de carácter liberal-democrático que pudiera, entonces sí, realizar la paz y la justicia con medios proporcionados, como los que usa el Estado democrático respecto de los propios ciudadanos. Ciertamente, sólo en un sistema mundial democrático ²⁵ se podría realizar la exigente condición kantiana de que todos los individuos fueran universalmente tratados como iguales en dignidad, como fines en sí mismos y nunca sólo como instrumentos, una condición en la que el recurso a la guerra pasaría a pertenecer a un pasado definitivamente sepultado. Para quien no le sea posible creer en ese verdadero final de la historia, el temible futuro le presentará como moralmente necesario algo que se acerque lo más posible a aquella utopía irrealizable. Y únicamente le cabrá desear que, al igual que no siempre se cumplen las más ingenuas esperanzas de los hombres, al menos tampoco se realicen sus más oscuros temores.



²⁴ *Humana conditio* (1985), trad. cast. de Pilar Giralt Gorina, *Humana conditio. Consideraciones en torno a la evolución de la humanidad en el cuadragésimo aniversario del fin de una guerra (8 de mayo de 1985)*, Barcelona, Península, 1988, pp. 99-100.

En este texto, Norbert Elias insiste particularmente en la alta improbabilidad de que semejante Estado hegemónico pudiera llegar a establecerse y, sobre todo, a consolidarse duramente (cfr. *ibid.*, esp. pp. 90-92 y 99-104). Sin embargo, en tan vidrioso asunto como el de incluir o excluir posibilidades a la historia humana, alecciona a la cautela el que el propio Elias —cuya sabiduría y sensatez soy el primero en reconocer y admirar— afirma también, con un error hoy tan evidente como entonces compartido y compartible, que las «ilusiones del supuesto derrumbamiento espontáneo de los regímenes capitalista y comunista son una quimera» (*ibid.*, p. 75).

²⁵ Sobre los sujetos y condiciones de tal democratización, véase mi artículo «Problemas de ámbito de la democracia», *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, núm. 6, 1989, pp. 117-120.